



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-020-2016-01105-01
Demandante:	Luís Albeiro Muñoz Cano
Demandada:	Colpensiones E.I.C.E.
Litis Pasiva:	Paula Andrea Muñoz Muñoz
Asunto:	Apelación y consulta de sentencia
Procedencia:	Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín
M. ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de Sobrevivencia: Cónyuges separados de hecho

Medellín, agosto dieciocho (18) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones E.I.C.E., y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la misma entidad, en los aspectos que no fueron objeto de alzada, respecto de la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Luís Albeiro Muñoz Cano contra Colpensiones E.I.C.E., y en el que se integró el contradictorio con Paula Andrea Muñoz Muñoz, como litisconsorte necesaria por pasiva, conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-05-020-2016-01105-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Luís Albeiro Muñoz Cano instauró demanda ordinaria laboral contra Colpensiones E.I.C.E. aspirando el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia que se causó por el fallecimiento de su cónyuge, la afiliada Alba Lucía Muñoz Muñoz; y el consecuencial pago de las mesadas comunes y adicionales causadas desde el 06 de enero de 2014, con los intereses de mora, o en subsidio la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

En respaldo de tales pedimentos el señor Luís Albeiro Muñoz Cano expuso que contrajo matrimonio con la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz el 10 de diciembre de 2005; que compartieron techo, lecho y mesa en el barrio San Agustín del municipio de La Estrella – Antioquia hasta el mes de diciembre del año 2011; y que aquella falleció el 06 de enero de 2014.

Dijo que le solicitó a Colpensiones E.I.C.E. el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge, pero el mismo fue denegado mediante la Resolución GNR 354941 del 09 de octubre de 2014, y posteriormente, a través de la Resolución GNR 148711 del 23 de mayo de 2016, aduciendo que no se había acreditado la convivencia entre los cónyuges (págs.02-08, doc.01, carp.02).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial legalmente constituido, **Colpensiones E.I.C.E.** admitió que la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz falleció el 06 de enero de 2014, y que el señor Luís Albeiro Muñoz Cano, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, prestación que fue denegada mediante la Resolución GNR 354941 del 09 de octubre de 2014, y posteriormente, a través de la Resolución GNR 148711 del 23 de mayo de 2016.

Aseveró que el actor no acredita los requisitos exigidos a para ser beneficiario de la prestación pensional deprecada; y oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones excepcionó de fondo inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobrevivencia; inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora; improcedencia de la indexación; prescripción; imposibilidad de condena en costas; y la excepción genérica (págs.40-47, doc.01, carp.01).

Finalmente, se advierte que en *sub juice* se integró el contradictorio con la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz, hija de la afiliada fallecida, como litisconsorte necesaria por pasiva, quien en su escrito de contestación asintió que su madre, la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz contrajo matrimonio con el señor Luís Albeiro Muñoz Cano el 10 de diciembre de 2005; sin embargo, aseveró que aquella solo convivió bajo el mismo techo con el demandante, durante dos (2) años contados a partir de la fecha en que contrajeron matrimonio; y que para la fecha en que falleció la causante, habían transcurrido más de siete (7) años desde el momento en que aquellos dejaron de convivir como pareja.

Consecuentemente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y formuló las excepciones de mérito que denominó falta de causa para pedir por inexistencia de la obligación; prescripción; y la excepción innominada o genérica (doc.13, carp.01).

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 21 de junio de 2023, declaró que el señor Luís Albeiro Muñoz Cano es beneficiario de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge, la afiliada Alba Lucía Muñoz Muñoz; condenó a Colpensiones E.I.C.E. a reconocerle la suma de \$55.639.252 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 06 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2022, en razón del 50% de la mesada, y entre el 01 de mayo de 2022 y el 30 de junio de 2023, en razón del 100% de la prestación, y a seguirle reconociendo una mesada equivalente a un (1) SMLMV, a partir del 01 de julio de 2023, a razón de 13 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos legales;

autorizó descontar los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud del retroactivo pensional adeudado; ordenó el reconocimiento y pago de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados a partir del 13 de julio de 2014, y hasta el pago efectivo de la obligación; declaró imprósperas las excepciones propuestas por la entidad demandada; y condenó en costas a Colpensiones E.I.C.E., en favor del demandante (doc.37, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la **Colpensiones E.I.C.E.** impetró el recurso de alzada procurando que se revoque íntegramente el fallo de primer grado, y en su lugar, se absuelva a su representada de las pretensiones incoadas, sustentando que el demandante no es beneficiario de la prestación, porque no pertenecía al grupo familiar de la afiliada para la fecha en que se causó el derecho a la pensión de sobrevivencia; ello teniendo en cuenta que el accionante confesó que solo convivió con la causahabiente hasta diciembre de 2011, y desde ese entonces solo tuvieron algunos encuentros casuales, no se siguieron prodigando ayuda económica, y nunca retomaron la convivencia, esto es, porque la causante y la demandante no convivieron durante los últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento (minuto 00:36:50, link audiencia, doc.37, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, la vocera judicial de **Colpensiones E.I.C.E.** insistió en la solicitud de revocatoria de la sentencia de primera instancia, reiterando expresamente los argumentos esbozados con la sustentación del recurso de apelación (doc.03, carp.01).

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por **Colpensiones E.I.C.E.**, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad social, respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de **Colpensiones E.I.C.E.**, en los puntos que no fueron objeto de alzada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz nació el 22 de octubre de 1968 (pág.90, doc.25, carp.01); contrajo matrimonio católico con el señor Luís Albeiro Muñoz Cano el 10 de diciembre de 2005 (págs.14-15, 16, doc.01, carp.01); y falleció el 06 de enero de 2014 (págs.12-13, doc.01, carp.01).
- Que el señor Luís Albeiro Muñoz Cano nació el 27 de abril de 1974 (pág.23, doc.01, carp.01; págs.314-315, doc.25, carp.01); solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge el día 13 de mayo de 2014 (págs.302-303, doc.25, carp.01), y la prestación que fue denegada a través de la Resolución GNR 354941 del 09 de octubre de 2014 (págs.22-29, doc.02, carp.01)

- Que el señor Luís Albeiro Muñoz Cano solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge en la fecha 28 de abril de 2016 (págs.17-19, doc.01, carp.01), pero la prestación fue otra vez denegada, esta vez, mediante la Resolución GNR 148711 del 23 de mayo de 2016 (págs.30-35, doc.01, carp.01).
- Que la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz nació el 19 de noviembre de 1998, y es hija de señora Alba Lucía Muñoz, más no del señor Luís Albeiro Muñoz Cano (págs.316-317, doc.25, carp.01); que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su madre el 18 de julio de 2014 (págs.209-211, doc.25, carp.01), y la prestación fue reconocida mediante la Resolución GNR 354941 del 09 de octubre de 2014, pero dejada en suspenso hasta que se acreditara la designación de curaduría (págs.22-29, doc.02, carp.01).
- Que la señora Nubia Margarita Muñoz de Muñoz, fue designada como curadora legítima de su nieta, la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz, inicialmente, por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de Medellín, mediante auto del 17 de marzo de 2014 (págs.91-94, doc.25, carp.01), y posteriormente, por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín, a través la sentencia 524 del 06 de julio de 2015, págs.98-108, doc.25, carp.01).
- Que la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz solicitó el pago de la pensión de sobrevivencia reconocida el 04 de septiembre de 2015 (págs.306-307, doc.25, carp.01), y fue incluida en nómina a través de la Resolución GNR 338562 del 28 de octubre de 2015, a partir del 06 de enero de 2014, en cuantía equivalente a un (1) SMLMV (págs.243-249, doc.25, carp.01).
- Que Colpensiones E.I.C.E., mediante la Resolución DNP-DD 1748 del 13 de julio de 2022, le ordenó a la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz reintegrar las mesadas canceladas entre el 01 de diciembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, por estar vinculada laboralmente con el empleador Calorcol S.A.S. (págs.152-157, doc.25, carp.01).

2.3.- PROBLEMA JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si al señor Luís Albeiro Muñoz Cano, en su condición de cónyuge supérstite, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia que se causó con ocasión del fallecimiento de la afiliada Alba Lucía Muñoz Muñoz, efecto para el que habrá que establecer si el mismo convivió con la causante durante los cinco (5) últimos años anteriores a la muerte, o en cualquier tiempo, esto es, si acredita las condiciones para que le siga asistiendo el derecho deprecado, pese de haberse separado de hecho?

2.4.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual el(a) cónyuge con vínculo matrimonial vigente que hubiese convivido con el(a) causante durante un interregno igual o superior a los cinco (5) años, en cualquier tiempo, es beneficiario(a) de la pensión de sobrevivencia, aunque que se hubiere separado de hecho, conforme a la postura adoptada por la jurisprudencia.

Consecuentemente, la sentencia de primera instancia será **confirmada**, en cuanto al reconocimiento de la prestación, pero **revocada**, en cuanto ordenó el reconocimiento de los intereses de mora y **modificada**, únicamente en el sentido de extender la condena en concreto.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1.- De la pensión de sobrevivencia

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, vigente para la fecha del fallecimiento de la causante 06 de enero de 2014, (págs.12-13, doc.01, carp.01), establece:

“ARTICULO 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con la causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (...).”

Sobre el particular, cumple relieves que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene por adoctrinado que parámetro esencial para determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es:

“... la convivencia -entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado” (reiterada en SL4099-2017, SL3818-2020).

También procede memorar que, aunque el órgano jurisdiccional de cierre en principio no diferenciaba, en cuanto a sus requisitos, la pensión de sobrevivientes de la sustitución pensional y, por ende, en cualquiera de los dos casos, exigía una convivencia previa de cinco (5) años, posteriormente varió su criterio, en el sentido de adoctrinar que:

“... para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado fallecido, no se requiere ningún tiempo mínimo de convivencia, sino que es suficiente acreditar la condición invocada para cumplir el presupuesto del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por manera que la cohabitación de 5 años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado” (CSJ SL1730-2020; SL4606-2020; SL2222-2021).

Sin embargo, la Corte Constitucional, en sede de tutela dejó sin efecto la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL1730 de 2020, considerando que la postura del órgano jurisdiccional de cierre, es contraria a la Constitución, reiterando que los cónyuges o compañeros permanentes supérstites deben demostrar el requisito de convivencia con el causante, por lo menos durante cinco años continuos, indistintamente de que este último fuera pensionado o afiliado al momento del fallecimiento, por cuanto:

“(i) la simple condición de pensionado no es una razón para establecer una diferencia entre los beneficiarios que integran el grupo familiar de este y del afiliado [...], (ii) la convivencia es un elemento indispensable para considerar que el cónyuge o cónyuge hace parte del grupo familiar del pensionado y afiliado [...], y (iii) la Ley 797 de 2003 sólo modificó el tiempo exigido de convivencia con el pensionado o afiliado, mas no alteró el concepto de beneficiario de la pensión de sobrevivientes [...]” (SU-149 de 2021).

En adición a lo anterior, según lo adoctrinado pacífica y reiteradamente por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, lo que difiere tratándose de cónyuge o de compañero(a) permanente, es la contabilización de los cinco (5) años mínimos de convivencia:

“En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala planteó que el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo.

(...)

De acuerdo con lo anterior, la convivencia de los compañeros permanentes debe constatarse en los cinco años previos al fallecimiento del pensionado o afiliado, puesto que, a diferencia del vínculo matrimonial, cuyas obligaciones personales no se agotan por la separación de facto, en tratándose de las uniones maritales de hecho, la cesación de la comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y de sus obligaciones y deberes personales, y por ende el compañero deja de pertenecer al grupo familiar” (CSJ SL1399-2018, que memora las consideraciones expuestas en las sentencias SL7299-2015; SL6519-2017, SL16419-2017 y SL6519-2017, y que ha sido reiterada en las Sentencias SL5141-2019; SL1869-2020; SL3693-2021).

De otra parte, respecto de la necesidad de acreditar que los lazos afectivos permanecieron inalterados hasta el momento de deceso del causante, cuando el reclamante es el cónyuge con vínculo matrimonial vigente pero separado de hecho, la jurisprudencia precisó:

“Al respecto, esta Sala ha señalado que la demostración de los lazos familiares y afectivos, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separado de hecho del causante, no es una exigencia prevista en el inciso 3.º del literal b). Lo anterior, en la medida que el texto de tal disposición establece que, en ese evento, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

En efecto, esta Corporación tiene adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado «en cualquier tiempo». Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).

Por lo visto, es incorrecto sostener que la cónyuge separada de hecho no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes pese a que su vínculo matrimonial está vigente.

Acerca de dicha tesis, en sentencia CSJ SL5169-2019, esta Sala explicó que la misma corresponde al verdadero alcance e intelección del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, porque aunado a lo referido anteriormente acerca de su finalidad, «su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos».

En la misma providencia, la Corte señaló que lo anterior obedece a que: (i) comúnmente, la separación de hecho ocurre por problemas estructurales en las relaciones matrimoniales, que a la larga generan el distanciamiento de los consortes; (ii) tales situaciones son imprevisibles por el legislador; (iii) y, por tanto, el rol del juez consiste en interpretar la norma conforme las particularidades de cada caso, es decir, darle el alcance que corresponda según cada situación que no pudo anticiparse en la ley. Conforme ello, anotó que incluso el artículo 176 del Código Civil, no establece dentro de las obligaciones a los cónyuges, las de mantener los lazos afectivos o familiares hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos.

En ese orden de ideas, la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es óbice para acceder a la pensión de sobreviviente, más si se tiene en cuenta, que la norma acusada no dispone tal exigencia” (CSJ SL359-2021, que memora las consideraciones expuestas en la sentencia SL5169-2019, y fue reiterada, entre otras, en las sentencias SL2257-2022, SL753-2023)

De consiguiente, esta Corporación colige que al señor Luís Albeiro Muñoz Cano, en su comprobada condición de cónyuge supérstite de la afiliada Alba Lucía Muñoz Muñoz (págs.14-15, 16, doc.01, carp.01), le concernía la carga de probar que convivió con la misma por un espacio igual o superior a cinco (5) años en cualquier tiempo, y con tal propósito, en el **interrogatorio de parte** expuso que contrajo matrimonio con la causante en el año 2005, y convivió con la misma hasta el año 2011; que siempre vivieron en el barrio San Agustín del municipio de La Estrella – Antioquia, en casa arrendada; que vivían con una hija de él y la hija de ella, y terminaron separándose por los problemas que habían entre sus hijas; que su esposa se fue para la casa materna, ubicada en el barrio Acevedo de la ciudad de Medellín – Antioquia, y él se quedó viviendo en el mismo apartamento; que después de la separación siguieron viéndose constantemente, y se encontraban cada 15 días ya fuera en el apartamento, o después del trabajo; que durante la enfermedad la visitaba en el hospital y en la casa materna, y también la acompañaba a las citas médicas; que no tuvieron hijos en común, aunque perdieron un embarazo; que no vivieron juntos antes del matrimonio; que ninguno de los dos inició convivencia o relación con otra pareja después de la separación; que cuando se separaron solo le ayudaba con gastos de vestido o educación para la hija; que durante la convivencia compartían los gastos del hogar; y que la relación amorosa se mantuvo incluso después de la separación, y nunca hablaron de divorcio porque siempre tuvieron la idea de volver a vivir juntos (desde el minuto 00:18:05, doc.29, carp.01).

Pese a lo anterior, se debe advertir que la declaración rendida por el demandante parte no tiene la fuerza de convicción para acreditar o desvirtuar la ocurrencia de los hechos objeto de debate, siendo que las mismas no le es dable producir sus propias pruebas, es decir “... *la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio*” (CSJ SL 24450 del 29-09-2005 SL 24450 del 02-07-2008, SL17191-2015, SL1024-2019, SL3308-2021).

Pues bien, remitiéndose la Sala a la prueba testimonial, se observa que el señor **Francisco Javier Suaza Puerta** dijo que conoce al señor Luís Albeiro Muñoz Cano de toda la vida, porque es sobrino de su esposa, y siempre han sido vecinos en el barrio San Agustín del municipio de La Estrella – Antioquia, razón por la que también conoció a la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz; que el demandante y la causante se casaron en el año 2005, y vivieron juntos en el mismo barrio durante unos seis (6) años, en casa arrendada, hasta el año 2011; que el demandante se fue a vivir con el papá, en el primer piso de la misma casa, y la causante se fue vivir con la mamá, también en La Estrella – Antioquia; que los visitaba muy poco después que se separaron, pero sabe que seguían visitándose, porque los veía juntos en el barrio; que desconoce la razón por la que se separaron; y que no se enteró de que la causante y o el demandante tuvieran otra relación después de separarse (desde el minuto 00:49:20, doc.29, carp.01).

Por su parte, la señora **María Elena Quintero Usma** manifestó que conoce al señor Luís Albeiro Muñoz Cano y conoció a la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz porque fueron vecinos en el barrio San Agustín del municipio de La Estrella – Antioquia; que aquellos vivieron juntos unos seis (6) años, desde el 2005 cuando se casaron, y hasta el 2011 que se separaron por problemas con las hijas que tenían *‘por aparte’*; que la causante se fue a vivir con la mamá, y el demandante se quedó viviendo en la misma casa, pero después de que se separaron, ella volvía y se quedaba amaneciendo; que ellos siguieron saliendo hasta que falleció la causante; y que a ninguno de los dos se les vio con otra pareja después de que se separaron; (desde el minuto 01:07:35, doc.29, carp.01).

A su turno, el señor **Jairo de Jesús Benjumea Garzón** aseveró que conoce al señor Luís Albeiro Muñoz Cano, porque está casado con una hermana suya, y conoció a la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz, como su esposa, incluso estuvo presente en el matrimonio que se celebró en diciembre de 2005; que aquellos vivieron juntos como cinco (5) años, en el barrio San Agustín del municipio de La Estrella – Antioquia, en una casa arrendada, hasta el año 2011; que desconoce las razones por las que se separaron; que junto con su esposa los visitaban cuando

vivían juntos; que después de que se separaron se enteró de que los mismos se seguían viendo; que el demandante se fue a vivir con el papá al primer piso de la misma casa, y la causante se fue a vivir con la mamá, en otro barrio; que ambos compartían los gastos del hogar mientras vivieron juntos; y que no les conoció ninguna otra pareja (desde el minuto 01:26:20, doc.29, carp.01).

Adicionalmente, se constata que en el plenario reposa la **declaración notarial** rendida el 15 de abril de 2016 por los señores Francisco Javier Suaza Puerta y María Elena Quintero Usma y en la Notaría Única del Circulo de la Estrella – Antioquia, oportunidad en la que afirmaron que conocieron al causante y la demandante durante más de 20 años por haber sido vecinos, y por ello les consta que los mismos contrajeron matrimonio católico el 10 de diciembre de 2005, convivieron juntos hasta diciembre del año 2011, y no se divorciaron ni disolvieron ni liquidaron la sociedad conyugal (pág.111-114, doc.25, carp.01); dichos que coinciden con lo indicado en la declaración rendida por los mismos en el trámite de la primera instancia.

Así las cosas, la Sala concluye que la prueba recabada en el trámite de la primera instancia, realmente acredita que el señor Luís Albeiro Muñoz Cano convivió en matrimonio con la señora Alba Lucía Muñoz Muñoz, durante un interregno no inferior a cinco (5) años, y que, de consiguiente, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, aunque se hubieren separado de hecho, en la medida en que el vínculo matrimonial se mantuvo vigente; y en glosa de ello, lo procedente será confirmar la sentencia en el aspecto en que fue apelada.

2.5.2.- Del disfrute de la pensión de sobrevivencia

Ahora bien, memórese que la prestación pensional deprecada fue reconocida en favor de la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz, en calidad de hija menor supérstite, a través de la Resolución GNR 338562 del 28 de octubre de 2015, a partir del 06 de enero de 2014, en cuantía equivalente a un (1) SMLMV (págs.243-249, doc.25, carp.01), y que la misma recibió el pago del 100% de las mesadas causadas hasta el

30 de abril de 2022 (docs.17-18, carp.01), sin que ello obste para que el señor Luís Alberto Muñoz Cano, siendo beneficiario con igual derecho, pueda reclamar o disputar el derecho que le correspondía desde que se causó la prestación, por cuanto que esa limitación no está contemplada en el ordenamiento jurídico.

Por esa razón, y para evitar que se sacrifique el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional ante la reclamación y surgimiento del derecho en cabeza de nuevos beneficiarios de la prestación económica, y se llegue a considerar un pago doble o sin causa alguna “... *el legislador permitió a la entidad que asume el reconocimiento de la pensión, compensar las sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios iniciales, o en su defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento respaldaban su solicitud*” (CSJ SL226-2021).

Como sustento de lo anterior, conviene traer a colación lo indicado en el artículo 5° de la Ley 1204 de 2008, que en relación con el asunto de la referencia prevé “... *En caso de que los beneficiarios iniciales tuvieran que hacer compensaciones a los nuevos por razón de las sumas pagadas, así se ordenará en el acto jurídico y lo ejecutará la entidad pagadora. Las compensaciones se harán descontando el valor correspondiente de las futuras mesadas*” (CSJ SL226-2021).

Normativa que opera de pleno derecho, y en virtud de la cual, la entidad pagadora se encuentra “... *habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno*” (CSJ SL226-2021).

Por lo tanto, el señor Luís Albeiro Muñoz Cano no puede correr con las consecuencias del reconocimiento exclusivo de la prestación en favor de la hija de su cónyuge, la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz, quien se aclara, no es hija del demandante (ver registro civil de nacimiento, págs. 316-317, doc.25, carp.01), “...

ni se le puede imponer una carga adicional, como es, que tenga que perseguir por su cuenta los dineros entregados al beneficiario inicial, porque el Estado cuenta con las herramientas necesarias para sanear las finanzas de las cuales se provee el sistema pensional” (CSJ SL226-2021).

Criterios éstos que han sido pacíficamente reiterados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL807-2022, SL1484-2022, SL1613-2022, SL2200-1011 y SL2714-2022.

Así las cosas, Colpensiones E.I.C.E. deberá reconocer en favor del señor Luis Albeiro Muñoz Cano, el 50% del valor de las mesadas pensionales causadas, entre el 14 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2022, y el 100% del valor de las mesadas causadas entre el 01 de mayo de 2022 y el 31 de agosto de 2023 incluidas únicamente las mesadas adicionales de diciembre de cada anualidad, siendo que la prestación primigenia se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011 (párrafo transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005), retroactivo pensional que asciende a la suma de \$60.026.192, según la liquidación anexa, que forma parte integral de esta sentencia, debiéndose modificar la sentencia de primer grado, en el sentido de extender la condena en concreto, conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 283 del CGP.

Ello así, teniendo en cuenta que la joven Paula Andrea Muñoz Muñoz, beneficiaria de la prestación en igual proporción al demandante, dejó de recibir el pago de la prestación desde el 30 de abril de 2022 (docs.17-18, carp.01), acreciéndose en la misma proporción el derecho en favor del demandante, y aunque en el plenario quedó demostrado que mediante la Resolución DNP-DD 1748 del 13 de julio de 2022, se ordenó a la misma reintegrar las mesadas canceladas entre el 01 de diciembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, por haberse vinculado laboralmente con el empleador Calorcol S.A.S.(págs.152-157, doc.25, carp.01), lo cierto es que los términos en los que fue reconocida la prestación en favor del actor, no fueron objeto del recurso de alzada, careciendo esta corporación de competencia para pronunciarse en disfavor de la entidad accionada.

Adicionalmente, cumple indicar que la mesada a reconocer a partir del 01 de septiembre de 2023 asciende a la suma de \$1.160.000, que sobre la misma operan los reajustes y descuentos de Ley; y que respecto de las mesadas retroactivas ordenadas no operó el fenómeno extintivo de la prescripción, siendo que desde la fecha de su causación, 06 de enero de 2014 (págs.12-13, doc.01, carp.01), la fecha de su reclamación, 13 de mayo de 2014 (págs.302-303, doc.25, carp.01), y la fecha de radicación de la presente acción, 27 de septiembre de 2016 (pag.08, doc.01, carp.01), no transcurrió el término trienal al que hacen referencia los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Finalmente, se memora que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización dispensada a Colpensiones E.I.C.E. para descontar los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud del retroactivo pensional adeudado.

2.5.2.- De los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“ARTICULO. 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”

Y por delineamiento jurisprudencial, los referidos intereses:

“... (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del

ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales” (CSJ SL3130-2020, SL1019-2021).

Así, en un caso de similares contornos al discutido al interior del proceso de la referencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó:

“Frente al cuarto de los reproches, esto es, la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, razón le asiste al apelante cuando señala que en el caso bajo estudio no resulta procedente la imposición de intereses de moratorios, como consecuencia del retardo por parte de la entidad en el reconocimiento de la prestación; ello por cuanto la concesión de la pensión de sobrevivientes estuvo fundado en la postura de origen jurisprudencial que adoptó la Sala frente al requisito de convivencia.

En fallo CSJ SL787-2013, la Sala adoctrino que no habría imposición de intereses moratorios cuando «las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley».” (CSJ SL 5141-2019).

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia consultada, en lo que respecta a la condena impuesta por concepto de intereses moratorios, por cuanto el reconocimiento de la prestación estuvo fundado en la postura fijada por la jurisprudencia; siendo que solo a partir de la valoración judicial de la prueba es que puede definirse que los cónyuges convivieron por un término superior a los cinco años, en su lugar, y como fue solicitado en la demanda, se ordenará la indexación de las mesadas adeudadas, hasta la fecha en que se haga efectivo, para compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde la fecha en que se hicieron exigibles, y que sufrirán hasta el momento en que se materialice su pago (CSJ SL359-2021).

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de alzada, se fijan como agencias en derecho, en favor del señor Luís Albeiro Muñoz Cano la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV, conforme a lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Luís Albeiro Muñoz Cano contra Colpensiones E.I.C.E., únicamente en el sentido de indicar que el retroactivo pensional causado entre el 06 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2023 asciende a \$60.026.192.

2.- Se **REVOCA** el numeral cuarto de la sentencia de fecha y origen conocidos, y en su lugar, se absuelve a Colpensiones E.I.C.E. de la pretensión referida al reconocimiento y pago de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 141 de 1993; en subsidio, se ordena la indexación las mesadas adeudadas, desde la fecha su causación y hasta la fecha en que se materialice el pago efectivo.


3.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.


4.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. y en favor de Luís Albeiro Muñoz Cano; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.


5.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO